



REPORTE ASESORÍA EXTERNA



SENADOR MATÍAS WALKER PRIETO

JULIO 2022

TRABAJO EN SALA¹

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS COLABORADORES EN MATERIA DE INFANCIA Y GRADUALIDAD DE INCUMPLIMIENTOS PARA SU INHABILITACIÓN. BOLETIN N° 15.164-07. Mensaje. Idea Matriz. Ampliar el plazo de acreditación de los organismos colaboradores de modo que tengan un periodo razonable de tiempo para hacerlo y modificar la ley N° 20.032, con el fin de establecer una gradualidad en la causal de inhabilidad para acreditarse, relativa al incumplimiento de la legislación laboral y previsional. Además, agrega una norma transitoria para regular la aplicación temporal de la inhabilidad. Comentarios. Se comparte la necesidad de que los OCA se acrediten en tiempo y forma, junto con los estándares creados para el nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez, en virtud de la Ley N°21.302, que Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y Modifica Normas Legales, 2021, que pone término a SENAME respecto de la protección de derechos y adopción, dando paso a una nueva institucionalidad. Mediante esta ley, se generaron reformas profundas a los organismos colaboradores acreditados, que participan de la atención y trabajo en áreas especializadas de protección, los que deben someterse a acreditaciones, plazo de un año, de acuerdo al artículo tercero transitorio¹ de la referida Ley. El proyecto, por tanto, busca ampliar el plazo. Asimismo, se propone modificar las inhabilidades e incompatibilidades establecidas, actualmente la ley señala que éste debe ser reiterado, proponiéndose que sea “grave”, acorde a la sanción y éstas deben haber sido impuestas tras la publicación de la ley, acorde a los principios de tipicidad, legalidad, , especialmente de irretroactividad el debido proceso racional y justo (administrativo).

PRÓRROGA DE VIGENCIA DE ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE EMERGENCIA EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBÍO (REGIÓN DEL BIOBÍO) (Boletín N° S2287-14) Destacar renovación, sin dobles discursos. Necesidad de entregar todos los instrumentos con los que cuenta un Gobierno para el resguardo del orden público y la seguridad pública, como es esta atribución que tienen los Presidentes de la República de decretar este Estados de Excepción Constitucional de Emergencia. El orden público y la seguridad pública, la paz social, principal preocupación de la ciudadanía. Se destaca que la utilización de esta herramienta ha contribuido a disminuir hechos de violencia. Asimismo, lamentar que los parlamentarios de

¹ Documento elaborado de acuerdo a la información disponible en primer y segundo trámite constitucional, según corresponda, informes de comisión, documentos acompañados en comisiones, entre otros, de acuerdo a información Cámara de Diputados y Senado de la República.

gobierno, todos juntos, no acompañaran al proyecto sobre infraestructura crítica y la preocupación acerca de la inexistencia de este Estado de Excepción en la propuesta de Nueva Constitución.

MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL, EN CUANTO A LOS QUÓRUMS DE APROBACIÓN DE REFORMAS CONSTITUCIONALES. BOLETÍN Nº 15062-07. Moción de los Senadores señora Ximena Rincón y señores Pedro Araya, Iván Flores y **Matías Walker**. Idea Matriz. Reducir los quorum de dos tercios y tres quintos contemplados en la actual Constitución Política de la República, en el capítulo de reforma constitucional, a uno uniforme de cuatro séptimos. Quorum aprobación. 2/3 senadores en ejercicio, inciso segundo del Art. 127 Constitución. En concreto propone: a) disminuye los quorum de aprobación de reformas constitucionales establecidos en el artículo 127 del Texto Constitucional, sea 3/5 o 2/3, dependiendo del capítulo a modificar, a uno 4/7; b) asimismo, en relación a observaciones parciales del PdR, se establece este mismo quorum; c) lo mismo, para leyes interpretativas de la constitución; d) respecto de la disposición decimotercera transitoria, el proyecto disminuye de 3/5 a 4/7 de los Senadores y Diputados en ejercicio el quorum previsto para las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios que digan relación con el número de parlamentarios, las circunscripciones y distritos existentes, y el sistema electoral vigente. Las disposiciones sobre reforma constitucional contempladas en la Constitución de 1980 han sido, a través del tiempo, extraordinariamente rígidas. Texto original de la Constitución de 1980 contemplaba un sistema casi irreformable respecto a ciertos capítulos fundamentales de la Constitución, constituyendo uno de los tantos enclaves autoritarios. En las actuales circunstancias políticas que vive el país, con el próximo término del funcionamiento de la Convención Constitucional, en que se presentará una propuesta de texto de Nueva Constitución para que la ciudadanía se pronuncie sobre su aprobación o rechazo, resulta indispensable volver a plantear la necesidad de bajar los quorums de aprobación de las reformas constitucionales. Se estima un quorum razonable que le otorga estabilidad a las normas constitucionales, pero que, al mismo tiempo, respeta el principio democrático para su reforma, evitando que un grupo minoritario tenga poder de veto.

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL PLAZO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LOS ARANCELES REGULADOS, DERECHOS BÁSICOS DE MATRÍCULA Y COBROS POR CONCEPTO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN, ESTABLECIDOS EN EL TÍTULO V DE LA LEY Nº 21.091, SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR, PARA EL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GRATUIDAD. BOLETÍN Nº 14997-04. Originado en mensaje el 17 de mayo de 2022 en el Honorable Senado. Idea Matriz. La propuesta consiste en postergar, para el año académico 2024, la entrada en vigencia de los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y los costos de titulación o graduación establecidos en virtud del Título V de la ley Nº 21.091 -sobre Educación Superior-, respecto de las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad, a fin de dar cumplimiento íntegro al procedimiento y plazos que la ley consagra en relación con la determinación de estos valores. Comentarios. La ley Nº 21.091, en su Título V establece el financiamiento de las Instituciones de Educación Superior adscrita a gratuidad, indicando la regulación en su párrafo segundo lo respectivo a los valores de los aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por titulación, correspondiendo a la Subsecretaría de Educación Superior fijar la aplicación de lo mandatado por la norma sobre el mecanismo que se diseña para realizar el cálculo de tales valores y, determinar, en virtud de lo dispuesto por la ley, por medio de resolución, los valores que se

señalan. El procedimiento que se establece para el cálculo es diseñado por una evaluación de una comisión de expertos, la cual proporciona una respuesta determinando los valores que correspondan y, cumpliendo lo fijado por la ley, se sustenta con antecedentes que responden al motivo por el cual se decide de tal modo. En este contexto, la Contraloría General de la República, por solicitud, señaló que hacía falta un vínculo entre la resolución que brinda el procedimiento y aquella que establece los valores, debido a que fue alegada la falta de antecedentes de la discusión que definió sus resultados y que no se apreció como correspondía ciertos argumentos, vulnerando el debido proceso que fija la ley 21.091. En tal sentido, la Subsecretaría de Educación Superior señala que no fue suficiente el tiempo que se dispuso en la normativa, debiendo entrar en vigencia lo resuelto antes de cumplido el plazo, conllevando a no ser relacionadas tales resoluciones como se proyectó. Con el propósito de brindar mayor tiempo a la Subsecretaría de Educación Superior en el tratamiento del cálculo y determinación de los valores de aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y los costos de titulación o graduación, se propone postergar la entrada en vigencia de tales términos. Antecedentes referidos en el informe. El párrafo 2° del Título V, de la ley N° 21.091, contiene el procedimiento para la determinación de los valores de aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación en el marco del financiamiento institucional para la gratuidad. En su artículo 88, y siguientes, indica que será la Subsecretaría de Educación Superior la que establecerá tales valores definiendo ciertos parámetros para realizar el cálculo. Ante esto, la Subsecretaría de Educación Superior por resolución exenta N° 6.687, de 30 de diciembre de 2019, estableció las primeras bases técnicas para el cálculo que señala la norma referida y, posteriormente, por Resolución Exenta N° 1.742, de 29 de marzo de 2021, dicha Subsecretaría determinó los valores de aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad. El proceso fue objeto de reclamos de ilegalidad ante la Contraloría General, quien en dictamen N°E147.687, del 15 de octubre de 2021, resolvió que, si bien la Subsecretaría de Educación Superior actuó en el ámbito de sus facultades legales, no proporcionó todos los antecedentes a las instituciones de educación superior, a fin de que enviaran sus apreciaciones sobre el informe de cálculo a la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles. A su vez, se rechazaron observaciones de la Comisión de Expertos sin suficiente fundamentación. Se argumentó que en las bases técnicas no se previó una agrupación de carreras en función a la estructura de costos similares, sino que se consideró únicamente la estructura curricular de las mismas, no respetándose los mínimos establecidos en el artículo 88 de la ley. Por todo lo anterior, la Contraloría General de la República indicó que la Subsecretaría deberá adoptar las medidas pertinentes para ajustar las antedichas resoluciones, según las observaciones. Ante ello, la Subsecretaría invalidó parcialmente las resoluciones, razón por la cual no fue posible cumplir con el plazo consignado en la ley N° 21.091, en relación con la Ley de Presupuestos, que establece que los aranceles regulados deben entrar en vigencia el año 2023. La propuesta que se indica señala que solo se debe postergar la entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y los costos por concepto de titulación o graduación.

PROYECTO DE LEY QUE CREA UN FONDO DE ESTABILIZACIÓN Y EMERGENCIA ENERGÉTICA Y ESTABLECE UN NUEVO MECANISMO DE ESTABILIZACIÓN TRANSITORIO DE PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PARA CLIENTES SOMETIDOS A REGULACIÓN DE PRECIOS. BOLETÍN No 14991-08.

Ingresado por mensaje el 16 de mayo, 2022. Idea Matriz. Atenuar las alzas abruptas en las cuentas eléctricas de los clientes sometidos a regulación de precios mediante la creación de dos nuevos

instrumentos para la estabilización de los precios de la energía eléctrica: el fondo permanente de estabilización y emergencia energética y el mecanismo de estabilización transitorio y complementario al establecido en la ley N° 21.185. Comentario. La iniciativa propuesta en concreto es una medida necesaria que busca estabilizar los precios respecto de las cuentas de energía eléctrica que han tendido al alza otorgando una gradualidad en el completo pago de estas cuentas, otorgando un mecanismo que de manera proporcional, equitativo y solidario reajustará los pagos de acuerdo con el consumo de los tramos de usuarios. Antecedentes. Sostiene el mensaje que la ley N° 21.185, promulgada el 30 de octubre de 2019 creó un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para frenar las alzas que afectarían las cuentas de la electricidad. El mecanismo de estabilización permitía la acumulación de saldos por la diferencia de facturación entre el precio estabilizado para clientes regulados ("PEC") y el precio que debía aplicarse de acuerdo a los contratos de suministro de energía con las empresas generadoras. Estos saldos no recaudados no podían superar el límite de 1.350 millones de dólares Estadounidense. La deuda que se acumularía se vería compensada con la entrada de nuevos contratos regulados de menor tarifa a partir del 2024. De este modo, la cuenta final de los clientes regulados se mantendría estable durante este periodo. Sin embargo, debido a la incidencia de varios factores, como el alza del tipo de cambio, los altos niveles de inflación y, recientemente, los efectos de la guerra en Ucrania, el monto límite fue alcanzado mucho antes de lo previsto. Esto significa que, de no existir ninguna medida especial como la que aquí se propone, es esperable que a partir del 1 de julio próximo se decrete un alza en torno al 40% en las cuentas de electricidad, que responde, justamente, a los incrementos en el precio de la energía. Así lo reconoce recientemente el Informe Técnico Preliminar de la Comisión Nacional de Energía, de mayo 2022, para la fijación de precios de nudo promedio del Sistema Eléctrico Nacional y el factor de ajuste a que se refiere el numeral 3 del artículo 1° de la ley N° 21.185.